



Comunidad de Madrid

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO MARCO COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PREVISTO EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SU UTILIZACIÓN NO ABUSIVA NI RESTRICTIVA DE LA COMPETENCIA. EXPTE: A/SER-003096/2021

El ejercicio de los derechos fundamentales a la educación y a la enseñanza básica obligatoria y gratuita reconocidos en los números uno y cuatro del artículo 27 de la Constitución, respectivamente, se ha instrumentalizado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La promoción de hábitos saludables de alimentación como medio para favorecer el desarrollo personal y social, es un objetivo en el que incide la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, en concreto en la redacción del artículo 17 apartado k) como objetivo de la educación primaria, así como en la incorporación de la Disposición Adicional cuadragésimo sexta.

El comedor escolar es un servicio complementario que además de servir a la Administración educativa como factor importante para la escolarización, también desempeña una destacada función social y educativa. De esta forma, los comedores escolares, además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, están integrados en la vida y organización de los centros educativos de tal manera que su programación, desarrollo y evaluación forma parte de la programación general anual del centro educativo.

Conforme se establece en el artículo 6 de la Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, **el coste diario del servicio de comedor, será a cargo de los usuarios del mismo, por tanto, de los alumnos y tendrá un precio único para todos.** (En este momento se encuentra en tramitación una nueva Orden reguladora de los comedores escolares que mantiene estas condiciones).

En aplicación de la autonomía de gestión de los centros educativos públicos, cuyo régimen jurídico se halla regulado en el Decreto 149/2000, de 22 de junio, las competencias en materia de contratación pública están desconcentradas en los centros educativos, pudiendo recibir la prestación de servicios y suministros con la limitación que la Ley de Contratos del Sector Público establece para la contratación menor, en su artículo 118, por tanto, sólo por importe inferior a 15.000 €, IVA excluido (artículo 10.3). Teniendo en cuenta que la estimación de alumnos usuarios del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos, por centro educativo y por curso implica en cuanto al gasto, la superación de la cuantía legalmente establecida para la adquisición por contrato menor, aun cuando corresponde a los usuarios del servicio sufragar el coste del mismo, se ha tenido en cuenta el valor estimado del coste del servicio en la totalidad de los centros, que asciende en un curso académico al importe de 115.937.614,60 euros, para considerar necesario acudir al marco normativo de la contratación pública para, entre los instrumentos existentes, optar por la aplicación de aquel que pueda atender y dar cumplimiento al mandato establecido por la Ley Orgánica de Educación y compatibilizarlo con la aplicación de los principios de concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación de los candidatos que informan la contratación





Comunidad de Madrid

pública. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, exige a los poderes adjudicadores, entre ellos, a las Administraciones Públicas la cobertura de sus necesidades, facilitando el acceso a las licitaciones de las pequeñas y medianas empresas, a través de, entre otras medidas, la división del objeto del contrato en lotes y mediante la reducción de cargas administrativas. Con el objetivo de establecer unos criterios homogéneos para todos los centros docentes públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid, en la prestación del servicio de comedor escolar, por la Consejería de Educación y Juventud se ha considerado que el instrumento más adecuado es el Acuerdo marco regulado en los artículos 219 a 222 de la citada Ley de Contratos del Sector Público.

Lo que ha implicado que por Orden 134/2021, de 25 de enero, del Consejero de Educación y Juventud, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid, se haya declarado la uniformidad del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no universitarios gestionados por la misma y se haya acordado la delegación en los Directores de los centros docentes públicos la competencia para la contratación del servicio de comedor escolar, mediante la celebración de contratos basados en el Acuerdo marco para los cursos académicos que indique dicho Acuerdo marco, conforme al procedimiento establecido en el mismo.

La reducción de las cargas administrativas se ha puesto de manifiesto en los criterios exigidos para acreditar la solvencia económica y financiera con la exigencia de una acreditación de cifra de negocios de bajo volumen, teniendo presente en la determinación de dicho importe a las pequeñas empresas. En cuanto a los criterios de solvencia técnica o profesional, se ha considerado que el medio establecido para su acreditación es proporcional al volumen de actividad que pueden asumir las adjudicatarias atendiendo a la distribución territorial de los centros que conforma cada lote. En este sentido, se pretende garantizar una cobertura adecuada del servicio a los centros educativos facilitando que las PYMES y autónomos puedan mantener la actividad que desarrollan habitualmente y que puedan ampliar su ámbito de negocio en la misma localidad o en otros municipios limítrofes incluidos en el mismo lote.

Por otro lado, entre las medidas previstas por la LCSP para facilitar el acceso de las PYMES a las licitaciones no se encuentran las de establecer criterios de solvencia o de adjudicación que primen a las empresas de proximidad, pues, de hecho, cualquier actuación en este sentido está considerada por la jurisprudencia y por la doctrina de los órganos consultivos en materia de contratación pública, como criterios que vulneran los principios de igualdad y no discriminación de los licitadores, que junto con los de publicidad y concurrencia constituyen los principios básicos que deben informar y regir la contratación pública.

Asimismo, el elevado número de lotes en los que se divide el Acuerdo marco-266- y la no existencia de limitación respecto al número de licitadores a los que se pueda adjudicar cada lote, beneficia la participación de pequeñas y medianas empresas lo que implica facilitar la participación de la mayor amplitud y variedad posible de operadores.

Otro de los aspectos que garantiza la concurrencia y beneficia la competencia es el plazo de duración del Acuerdo marco, fijado en un plazo inicial de dos años, prorrogable por otros dos hasta completar el máximo legal permitido de cuatro años, así





Comunidad de Madrid

como que el plazo de vigencia de cada contrato basado sea sólo de un año, coincidente con el curso escolar.

En conclusión, por las razones expuestas, con la tramitación del presente Acuerdo marco, **se pretenden garantizar los principios de competencia efectiva** facilitando la libertad de acceso a la licitación, evitando la discriminación entre operadores, minimizando los riesgos dinámicos de reducción del número de operadores que podría reducir la tensión competitiva en futuras licitaciones y minimizando el riesgo de comportamientos de carácter colusorio.

EL CONSEJERO
P.D. Orden 11634/2012, de 27 noviembre (BOCM 03-12-12)
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

